

REPÚBLICA DE COLOMBIA



RAMA JUDICIAL

TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN

Medellín, treinta (30) de noviembre de dos mil veintidós (2022)

La Sala Cuarta de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, integrada por los Magistrados CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES (ponente), MARIA EUGENIA GÓMEZ VELÁSQUEZ y NANCY GUTIÉRREZ SALAZAR, cumplido el traslado de que trata el artículo 13 de la ley 2213 de 2022, procede a dictar la sentencia que corresponde en este proceso ordinario de doble instancia instaurado por MELVA MENA CUESTA en contra de la SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A., con vinculación de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES-, el DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA y el MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO -OFICINA DE BONOS PENSIONALES- (pág. 95 Archivo 01) (**Radicado 05001-31-05-005-2019-00298-01**).

ANTECEDENTES

Pretende la demandante que se declare el derecho que le asiste al reconocimiento y pago de pensión de vejez a cargo de la AFP Porvenir S.A., dado el cumplimiento de los requisitos legales para ello. Como consecuencia de esto, persigue el pago de la mesada pensional desde el momento en que se verifique su desafiliación al sistema general de pensiones, en conjunto con los intereses moratorios que se han causado desde el momento en que la obligación se hizo exigible. Subsidiariamente, solicita que esos intereses de mora sean asumidos por la Gobernación de Antioquia.

Como sustento de sus aspiraciones, narró que nació el día 18 de abril de 1959, habiendo iniciado su vida laboral estando afiliada al extinto ISS hoy Colpensiones, realizando un posterior traslado con destino al régimen de ahorro individual con

solidaridad administrado por la AFP Porvenir S.A., alcanzando un total de 1800 semanas cotizadas. Indica que desde el año 2018, busca el reconocimiento de su mesada pensional, petición que no ha sido satisfecha por aducir el Fondo inconsistencias con la información de su bono pensional frente al tiempo que laboró para “ACUANTIOQUIA” entre el 26 de junio de 1984 y el 30 de noviembre de 1997, pese a presentarse la documental que certifica el período servido y los salarios detallados mes a mes. Señala que ante el Departamento de Antioquia elevó petición el 19 de marzo de 2019 requiriendo la corrección de su historia laboral, a fin de ser incluidos en el CETIL los meses de junio a diciembre de 1992, petición sobre la cual recibió respuesta el 26 del mismo mes y año donde se informa lo correcto del reporte atendiendo la fecha base para financiar el bono y las cotizaciones realizadas al ISS desde mayo de 1992 que implica que la expedición a su cargo de las semanas cotizadas. Agrega que es a Porvenir S.A. como su administradora a quien le corresponde la salvaguarda de la información atinente a su historia laboral, por lo que no debe ser afectada en el reconocimiento de su derecho pensional por un error que no le es atribuible.

Mediante auto del 9 de julio de 2019, con la admisión de la demanda (Pág. 95 Archivo 01) se ordenó la vinculación al trámite como litisconsortes necesarios por pasiva a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES-; el DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, y la NACIÓN - MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO a través de la OFICINA DE BONOS PENSIONALES -OBP-.

La Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público, allegó contestación al escrito inicial, con el que se opuso a las pretensiones deprecadas a su cargo, arguyendo que esa cartera ministerial no es emisor ni cuotapartista del bono pensional en discusión a más que no se ha recibido de parte de la entidad solicitud formal de la Administradora de la garantía de pensión mínima en nombre de la afiliada. En ese orden señaló no constarle ninguno de los fundamentos de hecho expuestos, y propuso como excepción de fondo la que denominó: el Ministerio de Hacienda y Crédito Público no es el emisor del bono pensional.

Colpensiones por su parte, allegó respuesta en término, aceptando la afiliación inicial de la demandante, cuyo estado actual es “trasladada”. Señaló no constarle los restantes fundamentos, formulando como excepciones de mérito las de

inexistencia de la obligación de pagar pensión de vejez, inexistencia de la obligación de pagar intereses moratorios, prescripción, buena fe e imposibilidad de condena en costas.

Porvenir S.A. también arrió contestación, señalando que de su parte se han realizado todas las gestiones administrativas a su alcance para obtener la actualización de la información de la historia laboral de su afiliada frente a “Acuantioquia”, intervención que aclara, es de medio y no de resultado conforme lo pregonía el artículo 20 del Decreto 656 de 1994. Aduce que corresponde es a Colpensiones y al Departamento de Antioquia a quienes les corresponde certificar los tiempos servidos a Acueductos y Alcantarillados de Antioquia S.A E.S.P con los salarios devengados sin lo cual la AFP no se encuentra autorizada para iniciar los trámites de la prestación por vejez, por lo que se opone al reconocimiento pedido por un lado, porque la actora no cuenta con el capital necesario para financiar la pensión, y por el otro, porque no se han podido integrar cabalmente los tiempos por negligencia de las entidades encargadas de certificar. Formuló la excepción previa de falta de integración de litisconsorcio necesario pidiendo la vinculación de Colpensiones y la Gobernación de Antioquia y las de fondo de inexistencia de las obligaciones demandadas por ausencia de los presupuestos y requisitos legales para tener derecho al bono pensional, cobro de lo no debido y falta de causa para pedir, buena fe de Porvenir S.A., prescripción, petición antes de tiempo, hecho exclusivo de un tercero, compensación e imposibilidad de reconocer intereses moratorios.

Finalmente, el Departamento de Antioquia se pronunció indicando no tener responsabilidad alguna en el asunto ni por acción ni por omisión por lo que su llamado debió hacerse bajo la connotación facultativa, relatando ser carga de Colpensiones responder por la información faltante conforme a lo que pregonía el Decreto 726 de 2018, administradora a la que se han efectuado cotizaciones desde el 27 de mayo de 1992. Como medios exceptivos planteó la falta de legitimación en la causa por pasiva, inexistencia de la obligación y prescripción.

El Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Medellín, mediante sentencia emitida el 14 de abril de 2021, ordenó lo siguiente:

PRIMERO: DECLARAR que a la señora MELVA MENA CUESTA, identificada con la CC. 43.087.887, le asiste el derecho a que le sea reconocida la pensión de vejez, bajo cualquiera de los dos postulados siguientes: Sea el artículo 64 de la Ley 100 de 1993, o inclusive según lo regulado en el artículo 65 de la misma, en virtud de lo indicado en la parte considerativa de la sentencia.

SEGUNDO: CONDENAR a la SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A. a reconocer y pagar a la señora MELVA MENA CUESTA, identificada con la CC.43.087.887, la pensión de vejez, bajo una de las dos siguientes alternativas: a) Bajo la modalidad de pensión de vejez financiada con los recursos que se encuentren en la cuenta de ahorro individual, frente a lo cual deberá solicitarse el reconocimiento del bono pensional correspondiente ante la Oficina de Bonos Pensionales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público por parte de Porvenir S.A.; verificará el valor que exista en la cuenta de ahorro individual de la demandante y de ser procedente su reconocimiento, en la medida que se cumpla con el requisito de que dichos valores permitan la financiación de una pensión de vejez equivalente al 110% de la Garantía de Pensión Mínima; la reconocerá a partir del momento en que la demandante realizó la solicitud de la pensión ante la entidad demandada, o en subsidio la reconocerá a partir del momento en que la Oficina de Bonos Pensionales entregue el valor del bono pensional correspondiente. b) De manera subsidiaria, en caso de que los dineros acumulados en la cuenta de ahorro individual de la demandante no sean suficientes para la financiación de una pensión de forma autónoma, PORVENIR reconocerá a la demandante una Garantía de Pensión Mínima, iniciando el pago de la misma, con base en los dineros que se encuentren en la cuenta de ahorro individual en cuantía equivalente a 1 smmv, por trece (13) mesadas al año, que se comenzará a pagar a partir del momento en que la demandante allegue certificación de no estar recibiendo ingresos por parte de su empleador. En todo caso, PORVENIR S.A. será obligada o condenada a realizar la gestión, cargando la información en el sistema interactivo del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, a efectos de diligenciar el trámite del reconocimiento de la Garantía de Pensión Mínima, si así fuere el caso, en los términos expuestos en la parte considerativa de esta decisión.

TERCERO: Se EXALTA al DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y A ACUANTIOQUIA a efectos de que participe activamente y conforme a su deber de colaboración armónica con PORVENIR S.A., en procura de realizar las gestiones para la redención del bono pensional a que pudiera tener derecho la demandante, la actualización de la historia laboral y además, al MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, para que concurra en el trámite de reconocimiento, eventualmente, de la Garantía de Pensión Mínima, de conformidad con lo expresado anteriormente.

CUARTO: DECLARAR la prosperidad parcial de la excepción de Imposibilidad o Improcedencia del reconocimiento de Intereses moratorios, en la medida en que en relación con los mismos, el despacho encontró que no son procedentes, pues dada la gestión

pendiente de realizarse para el reconocimiento de la prestación en beneficio de la actora, no se probó la existencia de mora injustificada en la entidad demandada, conforme lo expuesto anteriormente.

QUINTO: *CONDENAR en COSTAS a la SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A., de conformidad con lo dispuesto en los artículos 365 y 366 del Código General del Proceso. Inclúyase como agencias en derecho a favor de MELVA MENA CUESTA, identificada con la CC.43.087.887, la suma de \$3'634.104, que equivalen a 4 SMLMV. Se ABSUELVE de las demás pretensiones dirigidas en este proceso en contra de COLPENSIONES, GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA y el MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO.*

El Juez de Instancia encontró insatisfechos los requisitos de la pensión de vejez que regula el artículo 64 de la Ley 100 de 1993 por encontrar insuficiente el capital acumulado para su financiación, dirigiendo los fundamentos de la decisión al reconocimiento de la garantía de pensión mínima, sin perjuicio de que la Administradora demandada encontrara que de su capital surgiera un mejor derecho pensional, última aseveración que da sustento al numeral primero incluido en la resolutive de la sentencia.

La mandataria judicial de la demandante se apartó parcialmente de la decisión en cuanto señala que debe reconocerse el retroactivo de la posible pensión conferida así como los intereses moratorios, dado que la actora ya había reclamado su derecho pensional; sin embargo, dicha entidad se ha sustraído de realizar las obligaciones que le correspondían tendientes a concederlo. Considera que para efectos de la garantía de pensión mínima debe tenerse en cuenta la fecha desde que se empezaron a realizar los requerimientos en el año 2019 cuando ya contaba con la edad y había cotizado más de 1150 semanas, ya que conforme al artículo 21 del Decreto 656 de 1994 Porvenir S.A tenía la obligación de concederle una pensión provisional hasta tanto se aclarara lo relativo a su bono pensional, estando satisfecho el plazo que por ley tenía dispuesto, además que debe continuarse con las gestiones para materializar el derecho. Aduce que dadas las trabas administrativas a las que fue sometida, conllevan a que la administradora demandada se constituya en mora del pago de la prestación, por ser su carga revisar que la reclamante estaba inmersa en el derecho de garantía de pensión mínima por tener todos los requisitos, lo que da lugar al reconocimiento del retroactivo y los intereses.

Porvenir S.A por su parte, manifiesta que acorde al trámite legal que se tiene dispuesto para la emisión del bono pensional, se parte de una responsabilidad compartida que recae en la afiliada, sus empleadores públicos, Colpensiones y la OBP, recordando que Porvenir S.A es un simple intermediario y que a la demandante le corresponde a este punto aprobar su historial laboral, lo que no ha hecho, para dar inicio al procedimiento reglado ante la OBP, quien es la encargada de verificar los requisitos de la garantía de pensión mínima y promueve su reconocimiento y pago. Sobre las costas procesales, estima que no deben imponerse en tanto esta administradora no tiene incidencia en la reclamación del derecho que hoy se pretende, la que ha actuado de conformidad con el marco legal vigente.

Estando dentro del término correspondiente y bajo los lineamientos expresados, las apoderadas de las partes recurrentes presentaron sus alegaciones de segunda instancia.

CONSIDERACIONES

Previo a resolver el asunto, es necesario poner de presente que en esta instancia se encuentra por fuera de discusión que la demandante, nació el 18 de abril de 1959 contando en la actualidad con 63 años de edad (Pág. 63 Archivo 01), que al inicio de su vida laboral se encontraba afiliada al extinto ISS hoy Colpensiones desde el 1° de junio de 1992 (Pág. 191 Archivo 01), presentándose un traslado de régimen a través de Horizonte S.A fusionado por Porvenir S.A con efectividad a partir del 1° de agosto de 1995 (Págs. 259 y 261 Archivo 01) donde ha alcanzado un total de 1.408 semanas cotizadas y un capital total de \$101.106.288 con cálculo del bono pensional a marzo de 2019 (Págs. 33-46 Archivo 01). Laboró para Acueductos y Alcantarillados de Antioquia S.A. entre el 26 de junio de 1984 y hasta el 30 de noviembre de 1997 (Pág. 269 Archivo 01), siendo ausente en el CETIL al promover la demanda los salarios devengados entre junio y diciembre de 1992 (Págs. 47-55, 297-307 y 429-434 Archivo 01), cuya verificación y actualización de parte de Colpensiones el 17 de diciembre de 2019 estando en transcurso del proceso (Pág. 3 Archivo 09), dio lugar a la expedición de tal certificación electrónica de tiempos laborados con inclusión de todos los tiempos y salarios pendientes por corregir (Págs. 4-10 Archivo 13), informando Porvenir S.A que la historia laboral se encuentra debidamente conformada y actualizada

conforme al reporte de semanas brindado por Colpensiones, aduciendo estar suspendido el trámite porque la afiliada no ha dado autorización para la emisión del bono, lo que fue puesto en conocimiento por medio de la comunicación del 26 de diciembre de 2019, agregando que ello es necesario para proceder a tramitar el bono pensional a cargo del Departamento de Antioquia y solicitar a Colpensiones el traslado de los aportes no válidos para bono por tratarse de semanas inferiores a las 150 - artículo 115 Ley 100 de 1993- (Archivo 18).

Con base en esos elementos y a los argumentos de las alzas, corresponde a la Sala determinar si Porvenir S.A tiene a su cargo todas las gestiones encaminadas a reconocer a la demandante la garantía de pensión mínima consagrada en el artículo 65 de la Ley 100 de 1993. Definido ello, habrá de analizarse si hay lugar a imponer a cargo de la administradora el reconocimiento del retroactivo pensional y los intereses moratorios.

Pues bien, para definir los aspectos de los que disiente la pasiva condenada que se entienden enmarcados de manera exclusiva en la garantía de pensión mínima sobre la que fueron descubiertos los fundamentos de la decisión atacada, en cuanto afirma que el reconocimiento de la prestación ordenada no recae exclusivamente en su gestión, debe decirse que si bien en este trámite interactúan diferentes agentes, incluida la propia afiliada, de ninguna manera las administradoras pueden considerarse simples espectadoras. Es verdad que la garantía de pensión mínima corresponde ser reconocida por la Nación, más concretamente a través de la Oficina de Obligaciones Pensionales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público; sin embargo, en todo el proceso relacionado con las prestaciones a cargo de la AFP acorde a lo que dispone el artículo 83 de la Ley 100 de 1993, independiente de la modalidad pensional, deben procurar por la mejor utilización de los recursos administrativos, técnicos y financieros disponibles para que la emisión y redención de los bonos pensionales si hay lugar a ellos y la materialización del derecho, se efectúe en forma adecuada, oportuna y suficiente, a partir de una articulación de políticas, instituciones, regímenes y procedimientos, responsabilidad que las constituye en actores de primer orden en lo que atañe a los procesos y su gestión o trámite frente a sus afiliados.

En el contexto de la prestación reconocida por el *a quo* y atendiendo esas obligaciones a cargo de las AFP, se ha pronunciado la H. Corte Suprema de

Justicia en el marco del aludido Decreto 832 de 1996 recopilado en el Decreto Único 1833 de 2016, en el siguiente sentido:

“(i) la garantía de pensión mínima causada en favor de un afiliado, se financia con el capital obrante en la cuenta de ahorro individual y con los recursos que proporciona La Nación en virtud del principio de solidaridad; (ii) a partir de la información que suministre al fondo privado y con sustento en tal principio, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público reconoce el capital faltante para la prestación, esto es, la garantía de pensión mínima; (iii) de ahí que la encargada de gestionar la concesión de dicha prerrogativa ante la cartera ministerial, sea la administradora de fondos de pensiones en representación del asegurado, y (iv) una vez este cumple con los requisitos para acceder a la garantía, la entidad pensional debe comenzar el pago con cargo a los recursos que se encuentran en la cuenta de ahorro individual, y al agotarse, La Nación concurre con los que falten para subvencionarla, conforme lo establecido en el artículo 9.º del Decreto 832 de 1996, tal como lo adocrinó la Sala y ahora lo reitera, en sentencia CSJ SL4531-2020”. (Ver SL1464-2021 y SL3448-2022).

Con lo anterior se revela que si la demandante contaba con los requisitos propios de la garantía de pensión mínima que son: 1) la edad de 57 años para las mujeres que alcanzó el 18 de abril de 2016 (Págs. 63 y 295 Archivo 01), 2) 1.150 semanas mínimas de aportes que excedió al alcanzar 1.408 semanas en toda su vida laboral (Págs. 33-46 Archivo 01), y 3) insuficiencia de capital para financiar en un 110% del salario mínimo legal mensual vigente, resulta cuestionable, que la Administradora demandada pretenda desprenderse de una función que le es inherente, quien debió encargarse de lo pertinente para que desde el mismo momento en que la señora Mena Cuesta promovió su proceso pensional dirigiera todos sus esfuerzos para resolverlo en oportunidad de cara a los principios bajo los cuales se estructura el Sistema General de Pensiones y que enrostran estos reconocimientos.

Es claro que a fin de establecer que el saldo en la cuenta individual de la afiliada era menor al requerido para una pensión mínima, resultaba necesario determinar el valor del bono pensional tipo A modalidad 2 al que tiene derecho la demandante, por iniciar su vinculación laboral válida para bono pensional antes del 1 de julio de 1992, el que estaba pendiente por ser definido, pero aun cuando no se adjudica a Porvenir S.A una obligación de resultado, en esa materia, al integrar el servicio público de la seguridad social, le incumbía a partir de postulados de diligencia y eficiencia, concretar la consolidación de la historia

laboral y la correlativa aprobación con la expedición del bono que le correspondía al Departamento de Antioquia como emisor, con miras a la verificación del capital necesario para la financiación de la prestación pedida desde 2018, tarea de Porvenir S.A que se traduce en insuficiente, pues aun cuando concurren terceros en esa misión, estando debidamente acreditados los tiempos servidos a Acueductos y Alcantarillados de Antioquia S.A E.S.P sobre los que recaían las inconsistencias en el CETIL, y contar con toda la información de la demandante que da cuenta del pago de aportes al extinto ISS desde junio de 1992 y hasta cuando se presentó el traslado de régimen en agosto de 1995, para cuando se presentó esta demanda ningún trámite se evidencia desplegado para obtener de Colpensiones lo que se logró en el desarrollo de este juicio, con lo que a este punto ya se habría conseguido la certera confrontación del capital y el impulso de la garantía estatal.

Y es que el fondo contaba con todas las herramientas para bajo una adecuada administración, establecer la imposibilidad de financiarse una pensión de vejez a partir del capital y el valor del bono pensional que se tenía definido sin los seis ciclos del año 1992 que por demás no iban a generar un trascendental impacto en el importe total de la cuenta que para marzo de 2019 estaba en \$101.106.288 (Pág.33 Archivo 01), para que desde ese mismo momento por acreditación de los requisitos de ley, la demandante tuviera acceso a la prestación en desarrollo del principio de solidaridad, lo que se permite incluso, sin antes contar con el reconocimiento de la citada garantía de pensión mínima por parte del Ministerio de Hacienda a través de la Oficina de Obligaciones Pensionales, pues lo cierto es que el artículo 2° del Decreto 142 de 2006, que modificó el artículo 9° del Decreto 832 de 1996, estipula que la AFP debe reconocer provisionalmente la pensión de vejez con cargo a los dineros existentes en la cuenta de ahorro individual, mientras se efectúa el reconocimiento del aporte de la Nación a través del Ministerio de Hacienda (Ver SL1534-2019), argumentos en conjunto que derruyen las inconformidades expresadas por la administradora convocada, siendo preciso anotar que con la observancia de los requisitos que den certeza de su correcta asignación, la AFP sin restricción alguna para su pago, tiene a su cargo realizar las gestiones pertinentes para obtener de la Nación el subsidio, y del Departamento de Antioquia la emisión, expedición y pago del bono pensional por los períodos servidos a Acuantioquia S.A, a más de impulsar la devolución de los aportes de parte de Colpensiones que no cumplen los requisitos del artículo 115

de la Ley 100 de 1993, sin que sea posible trasladar a la afiliada las eventuales consecuencias de la inoperancia de terceros o de la propia administradora.

Las anteriores consideraciones, conllevan a que la garantía de pensión mínima ordenada por el operador inicial sea confirmada, reconocimiento que bajo ninguna circunstancia desequilibra el sistema de seguridad social en pensiones, pues esa es una de las maneras como se materializa la solidaridad, característica propia del régimen de ahorro individual, por cuanto lo que hace la Nación es completar la parte que haga falta para obtener dicha pensión, cuando los aportes acumulados en la cuenta individual, ya sean por cotizaciones obligatorias o voluntarias, sus rendimientos, y el bono pensional, no sean suficientes para cubrir la prestación (Ver SL5204-2021)

Ahora, busca la parte promotora del juicio el reconocimiento de un retroactivo pensional y el correlativo reconocimiento de intereses moratorios. Al respecto, debe decirse que si bien en el RAIS por regla general no es posible identificar una regla fija e invariable de causación y disfrute de la pensión, no ocurre ello en lo que tiene que ver con la garantía de pensión mínima en la que la causación y disfrute se somete a los parámetros del artículo 2° del Decreto 832 de 1996, según el cual hay lugar a la misma en favor de los afiliados siempre que se acrediten los requisitos de que trata el artículo 65 de la Ley 100 de 1993, lo que deja ver que el disfrute no se encuentra condicionado al retiro del sistema, dado que esta exigencia es propia del régimen de prima media con prestación definida a la luz del artículo 13 del Acuerdo 049 de 1990 (Ver SL4531-2020).

No obstante se tiene que el artículo 84 de la Ley 100 de 1993 contemplaba una excepción a esa garantía que incide en el disfrute de la pensión referida a que no habría lugar a la garantía estatal cuando el afiliado reciba pensiones, rentas y remuneraciones superiores a lo que le correspondería por pensión mínima, de lo que se ha dicho es un requisito de exigibilidad de la pensión o un elemento del disfrute, más que de la consolidación del derecho o de su causación, por lo que el retroactivo para el beneficio en cuestión se generará para cuando el afiliado deje de recibir los ingresos salariales que superaban el valor de la referida prestación (Ver SL4531-2020 y SL641-2022), disposición que se mantuvo vigente hasta cuando se derogó por el canon 336 de la Ley 1955 del año 2019, por el cual se expidió el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia, Pacto

por la Equidad”, publicada en el Diario Oficial No. 50.964 del 25 de mayo de 2019, significando tal precisión que, para la data en que se dio la causación del derecho en este caso - 18 de abril de 2016 - el contenido del mencionado artículo 84 le resultaba plenamente aplicable.

Aun con lo previo, como en este caso al momento en que se analiza el concepto perseguido, ese requisito que contemplaba la ley es inexistente, concuerda la Sala que el retroactivo debe ser concedido desde el momento que esa limitación para el disfrute desapareció, esto es, a partir del 26 de mayo de 2019, día siguiente a la expedición de la ya mencionada Ley 1955 de 2019, para cuando la demandante aun sin haber dejado de percibir los ingresos superiores al salario mínimo legal vigente que no son negados, ya no contaba con esa restricción para acceder a la prestación, resultando en ese orden inadecuado postergar el derecho hasta tanto se extingan los ingresos que superan el valor de la prestación pedida, a sabiendas de ser en la actualidad una exigencia sin vigencia, lo que da paso a que el fondo demandado adeude un retroactivo pensional de \$40.979.704 calculado del 26 de mayo de 2019 al 30 de noviembre de 2022, debiendo continuar reconociendo a partir del 01 de diciembre de 2022 una mesada equivalente al salario mínimo que para el año 2022 asciende a \$1.000.000, sumas que Porvenir S.A dispondrá acudiendo al capital acumulado por la afiliada al mismo tiempo que lleva a cabo la gestión ante la Nación para que se garantice el faltante, con autorización de descontar el valor correspondiente a las cotizaciones en salud para que sean giradas a la EPS a la que se encuentre afiliado el demandante.

AÑO	VR. MESADA	Nº MESADA	TOTAL
2019	\$ 828.116	8,16	\$ 6.757.427
2020	\$ 877.803	13	\$ 11.411.439
2021	\$ 908.526	13	\$ 11.810.838
2022	\$ 1.000.000	11	\$ 11.000.000
		TOTAL	\$ 40.979.704

Estos guarismos no sufrieron consecuencias por el fenómeno prescriptivo en tanto desde la data en que debe ser reconocida la prestación del estado y la presentación de la demanda no transcurrió el término trienal contemplado en los artículos 488 del CST y 151 del CPTSS.

En lo tocante con los intereses moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, resulta suficiente con memorar la posición imperante y reiterada de la Sala de casación Laboral, según la cual los intereses moratorios previstos en la Ley 100 de 1993, proceden siempre y cuando haya retardo en el pago de las mesadas pensionales, independientemente de la buena o mala fe en la conducta del deudor, o de las circunstancias particulares que hayan rodeado la discusión del derecho pensional, en tanto su imposición es de connotación simplemente resarcitoria, encaminada a aminorar los efectos adversos que se producen al acreedor por la mora del deudor en el cumplimiento de sus obligaciones, y no se está ante una situación que amerite considerar como excepcional, atendida la actitud omisiva de la administradora de pensiones, en tanto es claro que se trata de una obligación que se encuentra en cabeza de la administradora, quien estaba obligada a iniciar los pagos de la prestación mínima sin que lo haya hecho (Ver SL1020-2022), con tardanza injustificada para dar claridad a la situación pensional de su afiliada, intereses que deben reconocerse a partir del 27 de septiembre 2019, esto es transcurridos 4 meses desde cuando el disfrute se hizo exigible, para cuando era de pleno conocimiento de la administradora la intención de la solicitante de adquirir su estatus pensional y de hecho, ya estaba en curso el presente trámite judicial.

En conclusión, como quiera que la actora cumplió los requisitos de edad y semanas requeridas para la garantía solidaria, su financiamiento quedó asegurado con el capital de la cuenta de ahorro individual y con los recursos que debe asumir la Nación según lo estatuido en el Decreto 832 de 1996, cuyo disfrute debe ser materializado desde el momento de la derogatoria de la exigencia de los ingresos que superan el valor de la prestación pedida.

Con todo lo que fue analizado por esta colegiatura, quedan resueltas las inconformidades planteadas en las alzas, que conllevan en suma, a confirmar la providencia revisada modificando la fecha del disfrute que será el 26 de mayo de 2019 y adicionando el reconocimiento de los intereses moratorios a partir del 27 de septiembre de 2019.


Dada la ausencia de prosperidad de los recursos interpuestos por las partes, no se impondrán costas en esta instancia.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Cuarta de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, **MODIFICA** la sentencia objeto de apelación en el sentido de imponer el otorgamiento de la garantía de pensión mínima a partir del 26 de mayo de 2019 cuyo retroactivo calculado al 30 de noviembre de 2022 asciende a \$40.979.704 sin perjuicio de continuar reconociendo una mesada equivalente al salario mínimo a partir del 01 de diciembre de 2022. **ADICIONA** la providencia en cuanto impone el reconocimiento de intereses moratorios a partir del 27 de septiembre de 2019 y hasta que se materialice el pago. **CONFIRMA** en lo demás la decisión. Sin costas en esta instancia.

Notifíquese por EDICTO.

Los Magistrados,



CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES



MARÍA EUGENIA GÓMEZ VELÁSQUEZ



NANCY GUTIERREZ SALAZAR

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
SALA LABORAL**



SECRETARÍA

EDICTO

El Secretario de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín:

HACE SABER:

Que se ha proferido sentencia en el proceso que a continuación se relaciona:

Radicación:	05001310500520190029801
Proceso:	Ordinario
Demandante:	MELVA MENA CUESTA
Demandado:	MINISTERIO DE HACIENDA -OBP-
M. P.	CARLOS ALBERTO LEBRUN MORALES
Fecha de fallo:	30/11/2022
Decisión:	CONFIRMA, MODIFICA Y ADICIONA

El presente edicto se fija por el término de un (01) día hábil, con fundamento en lo previsto en el artículo 41 del CPTSS, en concordancia con el artículo 40 *ibidem*. La notificación se entenderá surtida al vencimiento del término de fijación del edicto.

Se fija hoy 1/12/2022 desde las 08:00 am. y se desfija a las 05:00 pm.

RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS
Secretario